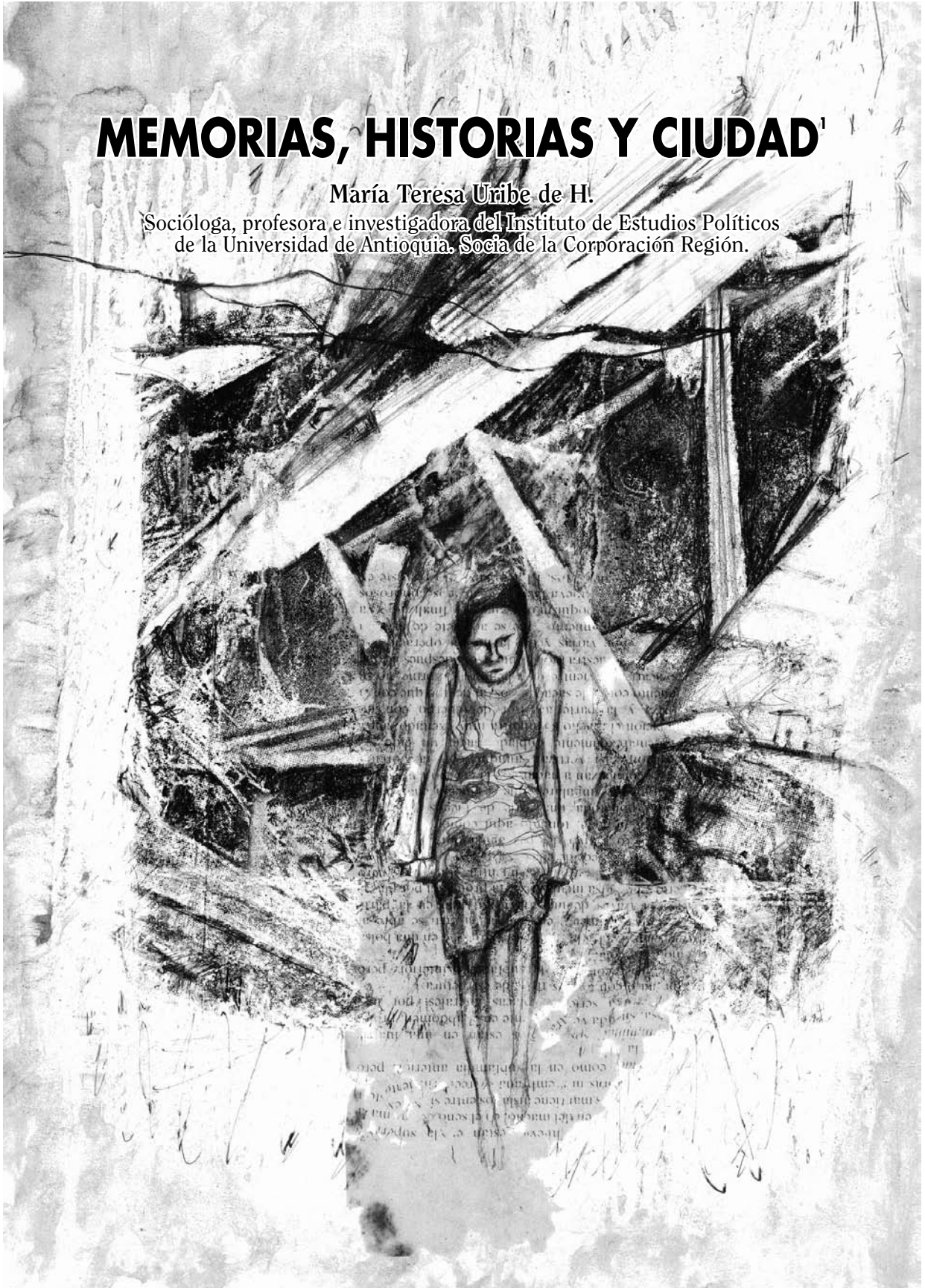


# MEMORIAS, HISTORIAS Y CIUDAD<sup>1</sup>

María Teresa Uribe de H.

Socióloga, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos  
de la Universidad de Antioquía. Socia de la Corporación Región.



**La verdad es apenas el inicio de un largo y difícil proceso; es sólo el punto de partida, incierto pero necesario para construir la memoria y la historia de la ciudad y para lograr que algún día, sea posible desterrar de este espacio a las Erinias, divinidades griegas de la venganza y reemplazarlas por las Euménides, diosas protectoras y benefactoras de la ciudad.**

El tema de la memoria y de la obligada reparación a las víctimas de los conflictos armados que atraviesan la vida de los países y de las grandes ciudades, es un tema que hoy agita el debate colombiano impulsado en parte por la propuesta de una ley de alternatividad penal, hoy llamada de justicia y reparación, que haría parte de una eventual negociación con los grupos paramilitares e impulsado también por una suerte de convicción cada vez más arraigada entre varios grupos de población según la cual, no es posible afianzar una paz duradera ni las mínimas condiciones de convivencia y reconciliación, pasando por sobre el silencio y el olvido de las víctimas, la negación de una memoria colectiva en la cual puedan reconocerse los diversos actores armados y desarmados de la sociedad y sin la reconstrucción de una historia plural que permita incorporar en los macrorrelatos nacionales y urbanos, las huellas de una guerra que terminó involucrando, aún contra su

voluntad, a todas las clases, los sectores, los grupos, los estamentos, las etnias, los géneros y los territorios de la nación.

Esto querría decir en primera instancia, que la recuperación de los relatos memoriales de las víctimas directas, de los victimarios, de los testigos y de las gentes que vivieron estos períodos oscuros —que para el caso colombiano aún no terminan, no acaban de pasar— cumplen esa tarea importante de poner en relación el pasado con el futuro a través del presente; la memoria, a pesar de todas sus ambigüedades, es una fuerza importante para la transformación de las sociedades y para el cambio de rumbo de la historia: La memoria no se ocupa de los hechos y de su orden cronológico, consigna huellas, impresiones, marcas y fracturas en la vida de los pueblos y de los individuos; la memoria está hecha de narraciones plurales, diversas, confrontadas, que selecciona,

almacena, omite y resalta aquello que le permite encontrar sentido, individual y colectivo y actuar con intencionalidad política frente al futuro (Barkhurst, 2000:91-104).

Pero a su vez la memoria es inevitable, toda sociedad que ha pasado por guerras, conflictos armados o dictaduras, se ve abocada, en algún momento de su devenir, a vérselas cara a cara con un pasado incómodo, vergonzoso, doloroso o traumático con el que es necesario saldar cuentas para proyectar algún futuro deseable, así este proceso sea sistemáticamente cercenado y excluido de la historia oficial y de los referentes identitarios, así se tomen muchos años, décadas o casi centurias para enfrentarlo y así, coimpliquen durante el proceso a varias generaciones atrapadas en los recuerdos traumáticos de los conflictos; a pesar de todos los esfuerzos

1. Texto presentado en la Mesa de Memoria y verdad, en la semana Buenos Aires-Medellín, del 8 al 15 de octubre del 2004.

para encadenarla, la memoria sigue allí, pertinaz, insistente, latente, atesorada por familiares, vecinos y testigos y emerge cada vez que las condiciones del presente requieran interpretaciones y explicaciones pues al fin y al cabo, el presente no es otra cosa que la huella de lo acontecido en el pasado y lo que éste nos ha legado para construir racionalmente el futuro.

La memoria, además de inevitable, es una necesidad histórica, un imperativo ético y un recurso político; algunas naciones, entre ellas la Argentina, tienen un largo camino recorrido y muchas cosas que enseñarnos a nosotros que apenas lo iniciamos o al menos de manera pública y colectiva pero la naturaleza de los conflictos urbanos, sus degradaciones, la pluralidad de los actores armados que concurren a ellos, la diferenciación de las víctimas, las largas duraciones de los conflictos y su desigual presencia en los barrios y las comunas de la ciudad de Medellín, están indicando que no existen fórmulas únicas y satisfactorias, que estos procesos ameritan poner el tema en público y discutir ampliamente sobre la mejor manera de acceder a la verdad de lo ocurrido durante las últimas décadas en la ciudad y sobre la forma de resarcir en alguna medida la dignidad de las víctimas.

El propósito de este pequeño texto es pues el de contribuir a ese debate, poniendo de presente algunas de las particularidades de los procesos de guerra y paz en Medellín para determinar cuál sería la estrategia más adecuada y pertinente para liberar las memorias atrapadas en las guerras inconclusas y las amnistías parciales.

## Los post – conflictos segmentados

El conflicto colombiano es multipolar, fragmentado, diverso, prolongado en el tiempo y diferenciado en los espacios lo que quiere decir que no es compatible con experiencias de conflicto y guerra vividas por otros países.

No estamos viviendo situaciones asimilables a un post-conflicto; no es el final de una guerra civil como en El Salvador o Nicaragua; no se trata del colapso de dictaduras militares como en el cono Sur o de una guerra civil seguida de un orden autoritario de muchos años como en España o frente a combinaciones de guerra y dictadura como en Sur África; en Colombia hemos tenido desde hace casi veinte años post-conflictos parciales y segmentados; negociaciones con diversos grupos armados, unas exitosas otras fracasadas pero que no suponen la terminación de las hostilidades ni su solución definitiva. Mientras se hace la paz con unos se continúa la guerra con los otros.

Se trata de procesos de negociación y acuerdo segmentados, cuyo énfasis ha estado puesto en las amnistías (perdón al delito) y los indultos (perdón a la pena), en dudosos procesos de reinserción y en modelos de justicia transicional (Uprimy y Lasso, 2004:101-187), útiles para lograr acuerdos políticos pero a costa del olvido de las víctimas y sus historias y con grandes dificultades para reconstruir alguna forma de memoria colectiva; pues los perdones judiciales supuestamente implicarían perdones sociales y políticos pero así no ocurren las cosas y con más frecuencia de lo aceptado, los reinsertados terminan asesinados, acentuando lo que podría llamarse el laberinto de

los espejos; el haber sido víctima ayer parece que justificaría moralmente al victimario de hoy en una cadena interminable de odios, venganzas y sangre que terminan por darle vida a la figura del guerrero vengador, víctima y victimario y testigo al mismo tiempo (Orozco, 2002:79-94).

No deja de ser llamativo que todos los grupos armados que se disputan el control territorial y la sociedad civil organizada en la ciudad, enuncien como lenguaje justificatorio de sus acciones violentas, el de los agravios recibidos y el de la sangre derramada, manteniendo un relato repetitivo que hunde sus raíces en las guerras civiles del siglo XIX; es decir, memorias autobiográficas y familiares, atrapadas en las guerras que como en un laberinto de espejos, reflejan, repitiendo de manera casi idéntica los imaginarios y los relatos configurados a lo largo de una historia centenaria. Se trata de un conflicto armado que no termina de pasar, que no finaliza, que nunca se resuelve para dar paso a otro estadio social, manteniendo latente el *animus belli*, la hostilidad manifiesta, con períodos de agudización y amnoriamento pero que reproduce, en un presente perpetuo, las razones de los diferentes vengadores, así cambien y se transformen los contextos sociales y políticos.

La ciudad de Medellín, de alguna manera ha sentido los efectos de estas guerras nacionales inconclusas y de las amnistías e indultos parciales, pero a su vez, ha vivido sus propias guerras endémicas, sus inacabados procesos de paz y sus post-conflictos armados; además de haber sido la sede de uno de los carteles de las drogas más poderosos y sanguinarios del mundo: el cartel de Medellín

(Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998). Esto implica la presencia simultánea en la ciudad de varios actores armados, (políticos y delincuenciales) incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, trenzados en una disputa territorial y de control hacia la población mediante la puesta en ejecución de estrategias de terror, crímenes atroces, masacres de jóvenes y población civil no involucrada, ajusticiamientos, desapariciones, desplazamientos forzados e intimidación generalizada.

No obstante todo esto, a principios de 1994 se puso en marcha un proceso de sometimiento a la justicia de algunos grupos armados que operaban en la ciudad, las Milicias Populares del Pueblo y las Seis y Siete de Noviembre y las Milicias Independientes del Valle de Aburrá; estos milicianos habían surgido como respuesta a la violencia desatada en los barrios por los atropellos de la policía, la delincuencia común, las venganzas mafiosas y las guerras entre pandillas o de estas con agrupaciones guerrilleras; este proceso de desmovilización y entrega de armas tuvo como contrapartida, el compromiso estatal de realizar algunas inversiones públicas en los barrios donde operaban las milicias; sin embargo no se contempló ninguna propuesta de reparación a las víctimas, nadie las mencionó, ni les pidió perdón por los atropellos, no se nombró siquiera el daño que les hicieron a ellas y a los pobladores de los barrios, ninguno quiso recordar en público la estela de muerte, sangre y sufrimiento que dejaron a su paso, muy pocos fueron judicializados y la mayoría regresaron a sus localidades como héroes que vuelven de la guerra y, mediante la conformación de una cooperativa de vigilancia y seguridad, la administración local les

entregó la custodia del orden público para desarrollar las actividades que hacían antes pero esta vez en representación de la institucionalidad.

Este modelo de paz y reconciliación fue un fracaso a la vuelta de un año, casi todos los comandantes habían sido asesinados y la mayor parte de los sobrevivientes se incorporaron a nuevos y viejos aparatos de violencia, bien con los narcotraficantes, bien con las bandas delincuenciales o con las organizaciones urbanas de los grupos paramilitares. Este modelo de acuerdo político, supuso en la práctica una auto amnistía, se perdonó el accionar violento de las milicias pero también el terror policial y militar y se silenció todo aquello que perturbase la aparente paz conquistada.

La segunda experiencia de post-conflicto segmentado se está viviendo en este momento; como parte de los acuerdos entre el gobierno y los paramilitares, asistimos a un espectáculo bastante curioso en Medellín, la desmovilización y entrega de armas del Bloque Cacique Nutibara que actuaba en la ciudad especialmente en los barrios del norte y el occidente; sin embargo, por revelaciones del propio Gobierno Nacional, hoy se sabe que el bloque mantiene una vanguardia armada mediante la cual sigue ejerciendo su poder autoritario en muchos espacios de la ciudad y que al menos el 30% de quienes entregaron las armas no pertenecían a esta organización y fueron incorporados a última hora quizá para aumentar artificialmente el contingente desmovilizado.

Esta vez tampoco se mencionó a las víctimas, nadie hizo el relato de los crímenes y las vejaciones sufridas por ellas; no se recordó a los muer-

tos, a los desaparecidos, a los desplazados, a quienes fueron desalojados a sangre y fuego de sus barrios y sus precarias viviendas; los comandantes del bloque pidieron un perdón genérico por los problemas que hubieran podido causar en lo que llamaron su heroica lucha por la salvación de la patria y el orden en la ciudad, de esta manera las víctimas perdieron por partida doble en la guerra y en la paz.

Ahora como antes, en ausencia de los relatos memoriales de las víctimas, de la preservación de alguna forma de memoria colectiva, se recurre a los viejos imaginarios y a los discursos que han venido acompañando todos los procesos segmentados de negociación y acuerdo en la ciudad y en el país; en nombre de la paz y la democracia, se invoca el olvido del pasado, el perdón a los victimarios, la reconciliación para hacerles más fácil su reincorporación a la sociedad y el llamado expreso a la no violencia; no obstante, de ese discurso sustentado en los más sagrados principios del Estado de Derecho, han sido asépticamente cercenadas las víctimas, sus dolores y sus rabias, ha sido subordinada la verdad a las exigencias de la negociación y, en aras del futuro, se ha sepultado el pasado.

El discurso democrático y de la no violencia, tan válido en sus fundamentos filosóficos y éticos, tan importante para construir proyectos de sociedad más justos y pluralistas, dicho en estas circunstancias y con estos antecedentes, se vuelve anodino, no le dice nada a nadie y resulta de un total irrespeto para con la víctimas pues estos discursos, instrumentalizados a veces desde el poder, resultan útiles para esconder otras historias trágicas que casi nadie

quiere oír, para escatimar verdades no dichas, para silenciar palabras de acusación y de sindicación y tal vez, para tranquilizar algunas conciencias que ingenuamente piensan que las verdades son enemigas de las democracias y que las memorias le producen ruidos innecesarios a los propósitos de construir el nuevo país. Sin embargo, las memorias no se dejan encadenar ni sepultar bajo la pesada loza de los perdones judiciales y si no se tramitan adecuadamente reproducen a perpetuidad el viejo laberinto de los espejos.

La verdad es el primer requisito para la justicia, la reparación y el perdón, sin embargo, valdría la pena discutir sobre la posibilidad real de poner en marcha procesos de esta naturaleza en la ciudad, en un contexto de posguerra segmentada y en contravía de los propósitos expresos del gobierno nacional orientados a intensificar la guerra.

### **La movilidad de las víctimas y de los victimarios**

Otra diferencia significativa de nuestro conflicto armado, además de la pluralidad de actores, es que las víctimas no están de un solo lado como ocurre con el terrorismo de Estado puesto en marcha durante las dictaduras militares del Cono Sur; es decir no estamos frente a un modelo de victimización vertical con un victimario único y bien identificado (Uprimy, 2004:115); tampoco se trata de modelos horizontales donde las víctimas están situadas en dos lados claramente definidos como ocurrió en las guerras civiles de Centroamérica o de los Balcanes (Uprimy, 2004:115); para el caso colombiano, y Medellín puede ser el ejemplo paradigmático, todas las clases, los esta-

mentos, las organizaciones sociales, los barrios y los corregimientos se han visto afectados alternativamente por varios de los actores armados, en el contexto de un conflicto móvil que se fragmenta, se diversifica, se desconfigura y reconfigura con una dinámica acelerada donde a veces no es posible identificar claramente al potencial victimario ni saber de quién es necesario precaverse.

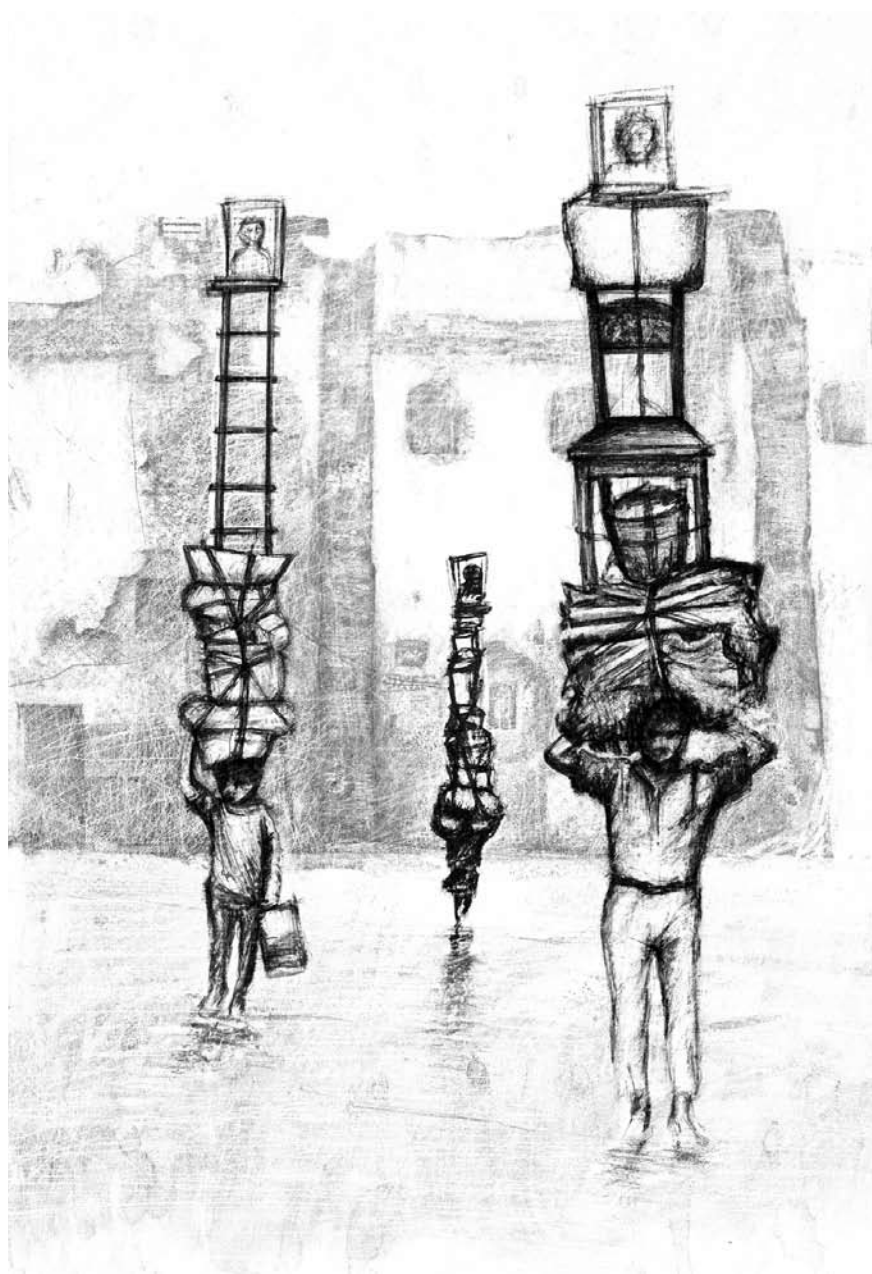
En Medellín los actores armados son móviles, cambiantes, puede ser cualquiera o ninguno; el protector de ayer puede ser el victimario de mañana, el que ostentaba una etiqueta bélica puede cambiarla, lucir otra y desde ambas, ejecutar violencias y afectar significativamente al mismo o a otro conglomerado social; de esta movilidad no se escapan las alianzas transitorias, a veces paradójicas, para enfrentar un enemigo común; las fragmentaciones de las grandes organizaciones mafiosas, delincuenciales o paramilitares que protagonizan intensas luchas de exterminio a su interior; ni escapan por supuesto las fuerzas de seguridad del Estado, que a veces actúan como tales —legal o ilegalmente— con su caudal de violación de los derechos humanos y otras veces, como aliados, apéndices o simpatizantes de carteles del narcotráfico, grupos paramilitares o grandes bandas de delincuencia común.

Pero visto en su conjunto, el asunto es más complejo porque al lado de los actores armados y un poco en la penumbra de la vida civil, se pueden ubicar auxiliares, colaboradores, financiadores, auspiciadores, informantes y toda una fronda de apoyo a los perpetradores de actos violentos y de violación sistemática de los derechos humanos. Esto implicaría que no estamos frente a un modelo

de “barbarie simétrica” como la llama Iván Orozco (2002:88) y que el modelo prevaleciente en la ciudad se acercaría más a una combinación de victimización vertical y horizontal con predominancia de uno u otro modelo de acuerdo con los espacios y con los tiempos.

La porosidad de las organizaciones armadas, la movilidad de sus efectivos, las extensiones de las redes de apoyo de cada cual, tiene repercusiones significativas en las memorias literales o autobiográficas de las víctimas y en las posibilidades de construcción de memorias colectivas, pues una misma familia o un mismo grupo de pobladores puede haber sido víctima, sucesivamente de varios grupos armados, incluidos los del Estado lo que dificulta significativamente la elaboración de los duelos, la conmemoración de los muertos e incluso la configuración de un yo narrativo, individual o colectivo, que continúe siendo él mismo, a través de las diferentes experiencias vividas y que permita la autointerpretación y algún sentido de identificación de su propio ser y su estar en el mundo. Ante la ausencia de un yo narrativo, cualquier intento por construir memorias colectivas se dificulta, las identidades individuales se fracturan y se disocian contribuyendo por esta vía a acentuar la gran fragmentación de la sociedad.

Quizá por esas razones el conflicto colombiano nunca se nombra en términos de víctimas y victimarios, poco se alude a las responsabilidades que le caben a cada cual en este largo y extenso desastre humanitario y en su defecto, la sociedad colombiana desde los años cincuentas del siglo pasado ha venido aludiendo a un término eufemístico, La Violencia, así con mayúscula, para nombrar



sin nombrarlos y adjetivándolos, a los sujetos que los afectaron gravemente en sus vidas, en sus bienes, en sus trayectorias existenciales, en sus presentes dramáticos y en sus futuros inciertos. A su vez, estas situaciones son vividas por las víctimas como un destino ineludible, como una tragedia natural que no se sabe muy bien de dónde vino, por qué se ensañó con ellos y cuándo puede vol-

ver a suceder, esta es otra faceta de la desintegración del yo narrativo.

Otro aspecto que acentúa estas porosidades y movibilidades entre víctimas y victimarios, tiene que ver con la larga duración de los conflictos, con el ánimo hostil que en ciertas coyunturas se agudiza y en otras pareciera aminorarse, que se desenvuelve desigualmente en las regiones y que a

lo largo de tantos años puede asumir diversas modalidades, incorporar nuevos actores, reciclar a los viejos y lo más importante, interactuar de diferente manera con pobladores y habitantes de los diversos espacios territoriales; a veces mediante la fuerza brutal y el terror extremo y en otras, mediante aproximaciones de corte más consensual, persuasivo y colaborativo, al modo de los clientelismos y los gamonalismos tradicionales.

Los pobladores saben, porque la memoria ha sido maestra en esto, que todo dominio es frágil, móvil, inestable, que puede cambiar a la vuelta de poco tiempo y ser sustituido por otro grupo enemigo o pueden regresar los que estaban antes a pedir cuentas; es explicable entonces que las gentes opten por el silencio, el acomodamiento, el refugio en la esfera doméstica o privada, o que prefieran, como dice María Victoria Uribe, “enterrar y callar” porque poner el dolor en público, pedir cuentas y señalar culpables puede desatar nuevos ciclos de violencia y exterminio.

Quizá lo único que identifique hoy a las diversas clases de víctimas en la ciudad, sean sus heridas morales, el dolor por las pérdidas, los sufrimientos por los desarraigos y los atropellos, esta suerte de identidad surgida de lo vivido, parecería una forma viable para desatar las memorias atrapadas en la guerra pero las escasas experiencias con las organizaciones de víctimas en Medellín han puesto de manifiesto que cuando se intenta ir más allá emerge con fuerza lo que se ha llamado “las memorias rivales”, las memorias mosaico y en disputa, generándose un escenario que sólo logra reproducir o si se quiere reflejar como en un espejo trizado,

los fragmentos y los antagonismos de la sociedad urbana en su conjunto (Vélez, 2003:29-51).

El problema no está en la emergencia de memorias rivales o que en un conflicto de estas características la memoria se convierta en otro campo de batalla, esta vez simbólico, donde se crucen recuerdos, sindicaciones, negaciones y explosiones de rabia, venganza y retaliación; que ocurra algo así es explicable pero el reto está en lograr que estas memorias rivales no se queden fijadas en el pasado y la unilateralidad pues de poco sirve enunciar los atropellos del enemigo y silenciar los propios; el propósito es lograr el tránsito hacia aprendizajes políticos; que las víctimas, logren un olvido razonable y los victimarios recuerden y asuman la responsabilidad que les cabe con todas las consecuencias jurídicas, éticas y políticas que ello implique.

Lo que no parece ser una estrategia adecuada es la de pasar por sobre la memoria de las víctimas como si ellas nunca hubiesen existido o como si fueran de alguna manera responsables de lo que les sucedió y que el derecho a la verdad que les asiste a todos los pobladores urbanos, sea sustituido por una retórica contra la guerra sin apellidos, contra la violencia sin responsables, por el derecho a la vida y a la paz sin nombrar a quienes la perturban o la sufren, situación que se vuelve insostenible cuando en muchas oportunidades, los familiares de las víctimas tienen que convivir en el mismo barrio con victimarios reconocidos y aceptarlos, bien como representantes del orden institucional, bien como los héroes que pacificaron la ciudad y con derecho por ello mismo a representarlos en los diversos espacios políticos de la sociedad; existen muy

diferentes formas de resarcir a las víctimas pero quizá la más primaria, la más elemental sea la de decirles públicamente que sus muertos son de todos, que la ciudad los recuerda sin distinciones, que hacemos nuestro el dolor que los embarga y que cada vez más personas nos empeñaremos en luchar contra el olvido.

### **Ni historia oficial ni olvido general**

El tercer eje diferencial del conflicto colombiano con relación a otras situaciones vividas en América Latina, tiene que ver con las particularidades de la historia y el olvido; no estamos frente a una política pública que cercene sistemáticamente el pasado o que intente tergiversarlo o trate de anular e impedir que se enuncien historias alternativas, no existe en el país o en la ciudad, algo que pudiésemos denominar historia oficial, convertida en libros de texto y de obligatoria difusión en las escuelas tal como ocurrió en la España franquista (Fontana, 1999) por ejemplo; en otras palabras, no existe un relato único con la pretensión de convertirse en historia patria o nacional y contra la cual pudiesen surgir interpretaciones alternativas o críticas, pues ésta ha sido una guerra de perdedores, de la que nadie quiere hacerse cargo.

Por el contrario, en la amplia fronda burocrática del Estado, subsisten multitud de interpretaciones y aproximaciones sobre lo acontecido y esto, sin contar con las versiones de los intelectuales, los periodistas, los historiadores y toda clase de analistas de la vida reciente en la ciudad; más que una historia oficial que sustituya a las demás, lo que ha predominado en Colombia es la prehistoria o si se quiere la tendencia a pensar el

pasado como si fuese algo nefasto de lo cual mejor ni acordarse y la tentación de situarse siempre en la frontera fundadora de un nuevo orden, donde entonces sí, empezaría la historia.

Esta apuesta por satanizar el pasado es un eje que recorre la vida republicana del país desde el siglo XIX; de allí que en nuestro caso, la estigmatización de la memoria sea presentada a los públicos de ahora y de antes como la única manera posible de asegurar alguna forma de convivencia y reconciliación. El olvido y el perdón, en este registro, sería un imperativo moral para los buenos cristianos; una virtud ciudadana para quienes proclaman la democracia y el recurso por excelencia para refundar la política una vez superado el magma originario de una prehistoria violenta.

En el imaginario nacional no tiene buen recibo eso de recordar, denunciar, preguntar e indagar por lo ocurrido; no hay que resucitar a los muertos, ni despertar los viejos fantasmas, se dice; no debe mirarse al pasado que es una larga sucesión de guerras y de violencias, innombrables e inexplicables y la construcción de futuro demandaría un ejercicio de amnesia colectiva, un recomienzo permanente, una perpetua fundación del nuevo orden. El resultado no buscado de estos imaginarios ha sido el de una suerte de pacto de silencio y olvido, entre rebeldes y gobierno, entre delincuentes y autoridades, entre víctimas y victimarios con un costo político altísimo para todos los que concurren a este pacto y para la sociedad en su conjunto.

Esta apuesta contra el pasado, este pacto de silencio, ha estado definido y en cierta forma garantizado por los

perdones judiciales, las amnistías y los indultos que al decir de Gonzalo Sánchez “han operado como política de olvido o forma de contramemoria” (Sánchez, 2003:92) pues no debe olvidarse que los perdones judiciales son de doble vía, se exonera a los rebeldes pero también a las autoridades y a las fuerzas de seguridad del Estado, se indulta a los enemigos pero también a los amigos; a su vez, cada acuerdo firmado, cada negociación, cada indulto se representa en el imaginario nacional como un nuevo pacto fundacional, como el inicio de una nueva era, como un recomienzo de la política y el principio de un nuevo orden justo, democrático e igualitario; lo de antes, no vale la pena mencionarlo, era el caos, la barbarie, el desorden, la prehistoria, lo que es necesario dejar atrás, sepultado para siempre de manera que no perturbe los sanos propósitos de reconciliación y convivencia.

Esta reiteración de autoamnistías múltiples o de amnistías amnésicas, deja a las sociedades y a las víctimas con una sola certeza, la del sinsentido; la percepción de una lucha fratricida que los envolvió, de un destino trágico que los arrastró, de haber vivido épocas oscuras de las cuales es mejor no hablar y menos recordar. De allí las grandes dificultades para escribir la historia de la violencia en Colombia de los años cincuentas hasta ahora, o para construir memorias colectivas que les permitan a las gentes que las vivieron y las sufrieron encontrarle sentido y explicación a sus dramas personales o familiares.

Es evidente que la mejor manera de terminar un conflicto armado es mediante las negociaciones y los acuerdos, que en estas situaciones se impone la justicia transicional, que sin indultos o amnistías es imposi-

ble que los alzados en armas consideren la posibilidad de dejarlas, lo que resulta intolerable es que esto se realice a costa de la negación del pasado, del olvido de las víctimas y el irrespeto por sus heridas abiertas; de las memorias truncadas y las historias imposibles, de los dramas sin explicación; de las preguntas sin respuesta y de los gritos ahogados en las gargantas de los afectados.

Tampoco parece muy conveniente que estos procesos de amnistía e indulto se realicen sin participación de los deudos y de la sociedad en su conjunto que tiene el derecho a saber la verdad, pues la contrapartida de los perdones generales son las culpas colectivas, el “todos somos culpables” que es la estrategia más eficaz para esconder y ocultar y para impedir que se establezcan responsabilidades efectivas, distinciones y gradaciones específicas en torno a todos aquellos actos que demandan el no ser olvidados como condición de posibilidad para la construcción de futuro.

A pesar de esta apuesta por el olvido, no puede afirmarse que éste sea un país sin memoria, como parecería deducirse de lo anterior y tal como se afirma frecuentemente; porque ocurre que los muertos de las guerras civiles y las violencias no se dejan enterrar y las víctimas directas e indirectas nunca renuncian a sus exigencias de verdad, justicia y reparación ni los pueblos que han vivido épocas de horror y desesperanza deponen su derecho a saber y como la memoria es inevitable, reaparece muchas veces a lo largo del devenir de las ciudades, a veces en forma de mito y otras a través de la literatura, la pintura, el cine, la fotografía, en fin, de las manifestaciones artísticas que son las únicas capaces de repre-

sar lo innombrable, pero también en Medellín, la memoria ha servido como estrategia política para exorcizar el olvido y construir algún futuro deseable.

Para ocuparnos sólo de este último aspecto, tendríamos que señalar que los habitantes de los barrios urbanos, los gremios, las asociaciones, las organizaciones sociales y políticas, las universidades han venido poniendo en práctica, por cuenta y riesgo, sin ningún apoyo estatal y a veces con su franca hostilidad, algunas estrategias de lucha contra el olvido y han venido realizando lo que podríamos llamar políticas de memoria.

No hablo únicamente de las series históricas que conservan algunas ONG de derechos humanos, sobre asesinados, desaparecidos, secuestrados, desplazados o torturados; tampoco de las memorias literales, historias de vida, denuncias judiciales o relatos de los afectados; existe en esta ciudad una extensa literatura memorial dispersa en muchos textos, investigaciones y bancos de datos; pero la mayoría de las veces, estas narraciones y estas estadísticas circulan en espacios domésticos y privados o en contextos muy restringidos y especializados sin tener la posibilidad de ser ventiladas en público y de llegar a auditorios amplios para ser confrontadas con otras memorias opuestas o complementarias que permitan ir construyendo historias con sentido.

A lo que quiero referirme ahora es a las políticas de memoria que vienen poniéndose en práctica en la ciudad, que se conocen poco y de las cuales no se ocupan los medios de comunicación; podemos rescatar la presencia semanal de las madres en el atrio de la Iglesia de la Candelaria,



que siguiendo las huellas de las madres de la plaza de Mayo en Buenos Aires, se reúnen semanalmente para preguntar por sus hijos desaparecidos, secuestrados o asesinados; las madres de Villatina, quienes después de un largo y difícil proceso de lucha, lograron la condena al Estado colombiano por la masacre de sus hijos, niños y adolescentes, a manos de la policía en el barrio de este nombre, lo que implicó algún acto de reparación mediante la colocación de un monumento recordatorio del hecho en el Parque de los Periodistas.

La colcha de retazos elaborada por el movimiento gay donde se consignan en pedazos de tela, nombres, fotografías, fechas y lugares de sus compañeros y compañeras asesinados por sus preferencias sexuales o los mapas elaborados por la Unión Patriótica, partido de izquierda surgido de uno de los procesos de paz y prácticamente eliminado por paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado, donde se anotan lugares y nombres de sus militantes asesinados. En algunos barrios de la ciudad sus habitantes han venido escribiendo en paredes, columnas, sardineles o lugares públicos, los nombres de los jóvenes residentes que han perdido la vida de manera violenta y son múltiples y variados los rituales, las conmemoraciones y las actividades culturales que se realizan en sindicatos, asociaciones y universidades para mantener viva la memoria de sus asociados.

En este momento, el municipio de Medellín está realizando un inventario sobre estos vehículos de la memoria, como los llama Elizabeth Jelin y uno se queda verdaderamente sorprendido de su cantidad, su plura-

lidad y de las formas tan imaginativas y creativas que han encontrado los pobladores de esta ciudad para romper el silencio, conjurar el miedo, exorcizar el olvido y darle alguna forma de salida no violenta a la indignación, la rabia, la impotencia y el desamparo. Esto quiere decir que a pesar de los pactos de silencio y de la satanización del pasado, los pobladores de esta ciudad siguen recordando, indagando y tejiendo memorias e historias, el paso siguiente sería el de ponerlas en público con todo el apoyo y el respaldo institucional y con todas las salvaguardas necesarias para evitar que se conviertan en un nuevo territorio de la disputa.

### Para concluir

Es evidente la necesidad de esclarecer la verdad sobre los hechos de violencia y muerte ocurridos en la ciudad durante las últimas décadas, no sólo en términos individuales sino también colectivos y la única manera de evitar que los perdones judiciales —necesarios e incluso deseables— conduzcan a un olvido facilista, es compensando la eventual ausencia de justicia con altas dosis de memoria y de verdad; la obligación de los Estados y las administraciones locales es recordar y hacer recordar, creando las garantías necesarias para desatar las memorias atrapadas en la guerra y creando los climas apropiados de respeto y de confianza para evitar, en la medida de lo posible, lo que ocurre cuando se abre sin precauciones la caja de Pandora.

De allí que sea absolutamente necesario emprender un debate amplio sobre la manera de llevar a cabo un proceso de verdad en la ciudad, sobre

el cuándo y el cómo hacerlo, sobre las garantías que pueden tener las víctimas para enunciar sus palabras sin interferencias o amenazas de viejos y nuevos victimarios y para que éstos o quienes resulten implicados, puedan expresar sus razones, relatar sus historias y contar, si es del caso, con todas las garantías del debido proceso y con una sana reinserción a sus entornos barriales.

La verdad es apenas el inicio de un largo y difícil proceso; es sólo el punto de partida, incierto pero necesario para construir la memoria y la historia de la ciudad y para lograr que algún día, como dice Iván Orozco, sea posible desterrar de este espacio a las Erinias, divinidades griegas de la venganza y reemplazarlas por las Euménides, diosas protectoras y benefactoras de la ciudad (Orozco, 2002). ●

### Referencias

- Barkhurst, D. (2000). Memoria, identidad y psicología cultural. *En*: Memoria colectiva e identidad nacional. R. Rivero et al. (comp). Madrid: Biblioteca Nueva.
- Uprimy, R. Lasso, LM. (2004). Verdad, reparación y justicia para Colombia. Algunas reflexiones y recomendaciones. *En*: Conflicto y seguridad democrática. Bogotá: Fundación Social, Friedrich Ebert, embajada de la República Federal de Alemania, en Colombia.
- Orozco, I. (2002). La posguerra colombiana: Divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación. *En*: Análisis Político N° 46. Bogotá: Iepri. Mayo-agosto.
- Jaramillo, A., Villa, MI. y Ceballos, R. (1998). En la encrucijada: Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventas. Medellín: Corporación Región.
- Vélez, JC. (2003). Una Comisión de la verdad en la encrucijada colombiana. *En*: Estudios Políticos N° 23. Medellín: Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia.
- Fontana, J. (Comp). (1999). Enseñar historia con una guerra civil de por medio. Barcelona: Crítica.
- Sánchez, G. (2003). Guerras, memorias e historia. Bogotá: ICAN.